

Santiago, veinticinco de octubre de dos mil diecinueve.

**Vistos:**

Que en los autos de esta Corte Rol N°23.078-2018, caratulados "Alvial Urrutia, Alicia con Municipalidad de Linares", provenientes del Primer Juzgado Civil de Linares, sobre juicio ordinario de indemnización de perjuicios, se dictó sentencia de primera instancia que rechazó la demanda en todas sus partes.

Los antecedentes se inician con la demanda deducida por Alicia Alvial Urrutia en contra del señalado municipio, por los hechos ocurridos el día 27 de agosto de 2014, cuando su hijo Cristian Felipe San Martín Alvial, alumno regular del Liceo Politécnico Irineo Badilla Fuentes, asiste a clases y, dentro del establecimiento, es amenazado de muerte por el alumno de iniciales N.E.L.A., quien materializa su amenaza horas más tarde, extrayendo un revólver con el cual le dispara en abdomen, piernas y glúteos, causándole heridas que provocan su fallecimiento.

N.E.L.A., menor de edad al momento de los hechos, fue condenado a la pena de 5 años de régimen cerrado con programa de reinserción social, como autor del delito de homicidio calificado.

Expone la demandante que los alumnos ese día estaban solos, sin la presencia de docentes o personal del colegio y nulo control respecto de la permanencia de los pupilos en



el establecimiento. Dicha situación propició que N.E.L.A. escapara del recinto en dos oportunidades y reingresara con un arma de fuego.

Imputa al municipio, en calidad de sostenedor del liceo, responsabilidad extracontractual al tenor de los artículos 2317, 2320, 1437, 2314, 2284 y 2329 del Código Civil, causándole estos hechos un daño moral derivado de la muerte de su hijo, que avalúa en la cantidad de \$500.000.000.

Al contestar la demanda, el establecimiento alega que la primera agresión fue verbal y no se tuvo conocimiento de ella. En cuanto a la muerte posterior, ella escapa a la responsabilidad del recinto, puesto que, habiendo adoptado todas las medidas exigidas, no pudo evitarla. En este sentido, N.E.L.A. asistió a las dos primeras asignaturas y luego se evadió del liceo; cuando regresa, lo hace saltando un portón, vulnerando el acceso normal y sin controles. En este contexto, un colegio de más de 1000 alumnos no puede presumir que uno de ellos fuera a extraer un arma de fuego, de modo que no existía medida alguna que pudiera haber tomado para evitar esta circunstancia.

El fallo de primer grado destaca que no existen en autos antecedentes relativos a rencillas anteriores entre los dos alumnos y, en efecto, ningún testigo manifestó que peleas pretéritas o aquella que dio origen a los hechos, se



hubieran puesto en conocimiento del establecimiento. El sentenciador divide los acontecimientos en dos hechos, el primero en horas de la mañana, ocurre cuando los alumnos se encontraban solos, evidenciando esta circunstancia una falta de diligencia de parte de la demandada.

El segundo episodio se da cuando N.E.L.A. hace uso del arma de fuego que trajo desde el exterior, entrando al establecimiento por una vía diferente a la autorizada, violando la reglamentación escolar y poniéndose al margen de su protección, de modo que ningún cuidado pudo ejercer el liceo respecto de su presencia.

Por tanto, la única falta de diligencia que puede atribuirse a la demandada dice relación con la ausencia de un profesor en la sala de clases al momento de ocurrir los hechos de la mañana, la cual que no es determinante para la ocurrencia de la pelea que terminó con la vida del alumno. Por tanto, conforme a la dinámica de los hechos, con la autoridad y cuidado que se exige a la demandada, esta no los pudo evitar, razón que conduce al rechazo de la demanda.

Apelada dicha determinación por la parte de la actora, la Corte de Apelaciones de Concepción la confirmó en todas sus partes.



En contra de esta decisión, la demandante dedujo recurso de casación en el fondo, para cuyo conocimiento se trajeron los autos en relación.

**Considerando:**

**Primero:** Que el arbitrio de nulidad sustancial acusa la infracción de los artículos 2320 inciso 5° y 2322 del Código Civil, además de los artículos 46 letra i) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2009 y 15 del Decreto Supremo N°315 del año 2010, ambos del Ministerio de Educación, puesto que la demandada no cumplió con sus obligaciones derivadas de tener a cargo un establecimiento educacional.

En cuanto a la sentencia impugnada, reprocha la separación de las agresiones en dos episodios inconexos, razonamiento que no se ajusta a la realidad.

Finalmente, expone que está acreditado que los alumnos se encontraban solos en el establecimiento y la permeabilidad de su perímetro. En este sentido, el liceo conocía que el alumno Nicolás Luengo se había escapado y no tomó ninguna acción concreta para su reubicación.

**Segundo:** Que concluye aseverando que la influencia de los yerros jurídicos antes detallados en lo dispositivo del fallo es sustancial, puesto que su correcta aplicación habría llevado al acogimiento de la demanda.



**Tercero:** Que los magistrados del mérito tuvieron por establecidos como hechos de la causa los siguientes:

1.- La actora Alicia Eliana Alvial Urrutia, es madre de Cristian Felipe San Martín Alvial.

2.- Con fecha 11 de mayo de 2015 se dicta sentencia condenatoria en causa Ruc N°1400829620-1, Rit 55-2015 seguida ante el Juzgado de Garantía de Linares, en la cual se da por asentado que el día 27 de agosto de 2014, alrededor de las 9:30 horas, N.E.L.A. sostuvo una discusión y agresión física con Cristian Felipe San Martín Alvial en dependencias del Liceo Politécnico "Irineo Badilla Fuentes" de Linares, amenazando el primero a éste último de darle muerte. Luego, N.E.L.A. salió de su colegio saltando una pandereta, fue a su domicilio, buscó un arma de fuego y regresó a eso del mediodía comenzando a buscar a San Martín Alvial, manteniendo su intención de darle muerte. Una vez que se encontraron, N.E.L.A. disparó reiteradamente contra Cristian San Martín, primero en el abdomen y luego en sus piernas, provocándole una lesión de tal gravedad que aún con los socorros médicos oportunos que le fueron prestados, no fue posible que sobreviviera, ya que falleció en el Hospital de Linares producto de la rotura traumática de la aorta abdominal causada por el proyectil disparado en su contra, lo que conllevó una anemia aguda y shock hemorrágico.



3.- Cristian Felipe Alvial San Martín y N.E.L.A. eran alumnos del Liceo Politécnico Irineo Badilla Fuentes, de la comuna de Linares y cuyo sostenedor es la municipalidad demandada.

4.- El día de los hechos, N.E.L.A. estuvo en clases en horas de la mañana y luego de discutir con Cristian San Martín se fugó del colegio por la pandereta ubicada a un costado de éste. El sector por donde saltó el alumno hacia afuera del colegio, se encuentra en el costado poniente, distante a una cuadra de la entrada principal y allí se emplaza un portón entre dos construcciones.

Previo a la agresión que causó la muerte el joven San Martín Alvial, N.E.L.A., reingresó al colegio saltando el portón referido.

**Cuarto:** Que la demanda se dirige en contra de la Municipalidad de Linares en tanto sostenedor del Liceo Irineo Badilla Fuentes. Tal calidad es ejercida en virtud de lo dispuesto en el artículo 4° letra a) de la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades N°18.695 que precisamente confiere a los municipios funciones relacionadas con la educación.

Tal calidad de sostenedor, en estos autos, no ha sido discutida.

Pues bien, dicha circunstancia pone de cargo del ente edilicio el cumplimiento de una serie de obligaciones,



dentro de las cuales se encuentra el resguardo de la integridad física y psíquica de sus alumnos. En efecto, el artículo 10 de la Ley General de Educación N°20.370, dispone: "a) *Los alumnos y alumnas tienen derecho a recibir una educación que les ofrezca oportunidades para su formación y desarrollo integral; a recibir una atención y educación adecuada, oportuna e inclusiva, en el caso de tener necesidades educativas especiales; a no ser discriminados arbitrariamente; a estudiar en un ambiente tolerante y de respeto mutuo, a expresar su opinión y a que se respete su integridad física y moral, no pudiendo ser objeto de tratos vejatorios o degradantes y de maltratos psicológicos. Tienen derecho, además, a que se respeten su libertad personal y de conciencia, sus convicciones religiosas e ideológicas y culturales. Asimismo, tienen derecho a que se respeten las tradiciones y costumbres de los lugares en los que residen, conforme al proyecto educativo institucional y al reglamento interno del establecimiento. De igual modo, tienen derecho a ser informados de las pautas evaluativas; a ser evaluados y promovidos de acuerdo a un sistema objetivo y transparente, de acuerdo al reglamento de cada establecimiento; a participar en la vida cultural, deportiva y recreativa del establecimiento, y a asociarse entre ellos.*



*Son deberes de los alumnos y alumnas brindar un trato digno, respetuoso y no discriminatorio a todos los integrantes de la comunidad educativa; asistir a clases; estudiar y esforzarse por alcanzar el máximo de desarrollo de sus capacidades; colaborar y cooperar en mejorar la convivencia escolar, cuidar la infraestructura educacional y respetar el proyecto educativo y el reglamento interno del establecimiento".*

*Por su parte, la letra f) del mismo artículo, preceptúa: "Los sostenedores de establecimientos educacionales tendrán derecho a establecer y ejercer un proyecto educativo, con la participación de la comunidad educativa y de acuerdo a la autonomía que le garantice esta ley. También tendrán derecho a establecer planes y programas propios en conformidad a la ley, y a solicitar, cuando corresponda, financiamiento del Estado de conformidad a la legislación vigente.*

*Son deberes de los sostenedores cumplir con los requisitos para mantener el reconocimiento oficial del establecimiento educacional que representan; garantizar la continuidad del servicio educacional durante el año escolar; rendir cuenta pública de los resultados académicos de sus alumnos y cuando reciban financiamiento estatal, rendir cuenta pública del uso de los recursos y del estado financiero de sus establecimientos a la Superintendencia.*





*Esa información será pública. Además, están obligados a entregar a los padres y apoderados la información que determine la ley y a someter a sus establecimientos a los procesos de aseguramiento de calidad en conformidad a la ley".*

*Respecto de la convivencia escolar, más detallado resulta el artículo 16 A y siguientes del mismo estatuto normativo. Es así como el artículo 16 C señala: "Los alumnos, alumnas, padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales deberán propiciar un clima escolar que promueva la buena convivencia de manera de prevenir todo tipo de acoso escolar".*

*Finalmente, el artículo 16 D preceptúa: "Los padres, madres, apoderados, profesionales y asistentes de la educación, así como los equipos docentes y directivos de los establecimientos educacionales, deberán informar las situaciones de violencia física o psicológica, agresión u hostigamiento que afecten a un estudiante miembro de la comunidad educativa de las cuales tomen conocimiento, todo ello conforme al reglamento interno del establecimiento. Si las autoridades del establecimiento no adoptaren las medidas correctivas, pedagógicas o disciplinarias que su propio reglamento interno disponga, podrán ser sancionadas*



de conformidad con lo previsto en el artículo 16 de este cuerpo legal", esto es, multas de hasta 50 Unidades Tributarias Mensuales, que podrán duplicarse en caso de reincidencia.

**Quinto:** Que de las normas legales antes transcritas puede colegirse que sobre el establecimiento educacional - y, en consecuencia, sobre su sostenedor - recaía el deber de velar por la seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario para prevenir eficazmente que quedaren expuestos y sin vigilancia ante otros miembros de la comunidad educativa que pudieren agredirlos, como ocurrió en la especie. Desde luego, el administrador de un establecimiento educacional debe aplicar un cuidado elevado con miras a proteger la vida e integridad física de los estudiantes, teniendo en cuenta que, en este caso, se trata de adolescentes, que requieren especialmente de orientación, dadas las especiales características de la etapa del desarrollo en que se encuentran; en el caso de autos, uno de ellos escapó del recinto y se mantuvo fuera por a lo menos dos horas, sin que dicha situación fuere puesta en conocimiento de su apoderado o de las autoridades, para luego volver, por una vía no destinada al efecto, portando un arma de fuego con la cual disparó a uno de sus compañeros, en un lugar donde se encontraban también otros alumnos.



En este contexto, la demandada no sólo ha incurrido en un incumplimiento de su obligación de velar por la integridad física y psíquica del pupilo fallecido, sino también ha permitido que tal derecho se vea amenazado respecto del resto de los miembros de la comunidad educativa, que se hallaban en el establecimiento el día de los hechos.

**Sexto:** Que, esclarecido lo anterior, cabe poner de relieve que la responsabilidad del Estado se genera por la falta de servicio, factor de imputación que se presenta como una deficiencia o mal funcionamiento del servicio en relación a la conducta normal que se espera de él, estimándose que ello concurre cuando el servicio no funciona debiendo hacerlo y cuando funciona irregular o tardíamente.

Específicamente en lo que respecta a las Municipalidades, el artículo 152 de su Ley Orgánica N°18.695 dispone, en su inciso primero: "*Las municipalidades incurrirán en responsabilidad por los daños que causen, la que procederá principalmente por falta de servicio*".

En el caso de autos, la no adopción de medidas mínimas de precaución o la insuficiencia de las mismas es constitutiva de falta de servicio, puesto que los sucesos a que se refiere la presente causa tienen la connotación



necesaria para ser calificados como generadores de  
responsabilidad, toda vez que se desarrollaron en el  
contexto de la prestación de un servicio público  
educacional, que comprende el deber de velar por la  
seguridad de los alumnos, empleando el cuidado necesario  
para prevenir eficazmente hechos como en este caso  
ocurrieron y adoptando todas las medidas que sean  
necesarias, de forma tal que se debía evitar exponer a los  
alumnos a riesgos innecesarios, sin escatimar esfuerzos  
para ello, lo que no se hizo.

**Séptimo:** Que toda actuación de la Administración está  
sujeta a la ley de conformidad a lo dispuesto en los  
artículos 6 y 7 de la Constitución Política de la  
República, de modo que genéricamente toda responsabilidad  
de los órganos públicos tiene por antecedente el  
incumplimiento de un deber legal que en la especie le ha  
sido impuesto, entre otras, por las disposiciones citadas  
en el fundamento cuarto precedente, de tal manera que la  
omisión que se dejó establecida es constitutiva de una  
falta de servicio, debido a que el órgano de la  
Administración municipal actuó en contravención de normas  
legales expresas que pusieron a su cargo el cuidado de los  
educandos cuando se encuentran en las dependencias del  
establecimiento educacional que administran.



En esas circunstancias, sólo cabe colegir que el ente demandado incurrió en falta de servicio por cuanto no adoptó las medidas de resguardo, protección y prevención necesarias para resguardar la integridad física y psíquica de sus alumnos, pese a que se encontraba obligado a hacerlo.

**Octavo:** Que esta Corte no desconoce el hecho que la demanda alega la responsabilidad extracontractual de la Municipalidad de Linares y, en efecto, alega la actora que el ente edilicio respondería tanto por el hecho propio como por el ajeno, citando al efecto los artículos 2320 y 2322 del Código Civil, únicas normas de rango legal que luego se dan por infringidas en el arbitrio de nulidad sustancial, y que no se identifican con aquellas que sustentan el factor de imputación aplicable a los órganos de la Administración del Estado, esto es, la falta del servicio, cuyo origen se encuentra en los artículos 4 y 42 de la Ley Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Estado N°18.575 y específicamente para los municipios, en el artículo 152 de la Ley N°18.695.

La circunstancia anterior no es obstáculo para que esta Corte dé por establecido el yerro jurídico que se viene razonando, en tanto los tribunales, para resolver el asunto sometido a su decisión están facultados para revisar el derecho aplicable, siempre que ello se encuentre



conforme y congruente con los presupuestos fácticos de la pretensión intentada; ello no es sino la más pura aplicación del principio *iura novit curia*, en el sentido que el juez conoce y aplica el derecho, sin que ello afecte la *causa petendi*. En esta dirección, el órgano jurisdiccional no queda circunscrito a los razonamientos jurídicos expresados por las partes, sino sólo a sus fundamentos de hecho, lo cual permite, en este caso, concluir que los sentenciadores de segundo grado incurrieron en falta de aplicación de aquellas normas que regulan la responsabilidad por falta de servicio y, concretamente, las referidas a la responsabilidad municipal por hechos ocurridos en establecimientos educacionales que afecten la integridad física y psíquica de sus alumnos.

**Noveno:** Que, en consecuencia, forzoso es concluir que los jueces de segunda instancia yerran al estimar que no ha existido la responsabilidad demandada, la cual se verifica por la falta de servicio incurrida por el municipio, al no resguardar eficazmente la integridad física y psíquica de los alumnos puestos bajo su cuidado.

Todo lo expresado permite concluir que el fallo impugnado ha infringido los artículos 4 y 42 de la Ley N°18.575, 152 de la Ley N°18.695, como también los artículos 10, 16 C y 16 D de la Ley N°20.370 pues el establecimiento educacional cuyo sostenedor es la demandada



prestó un servicio de manera deficiente y no actuó, debiendo hacerlo, de lo que se sigue que concurren las exigencias del factor jurídico de imputación que exige el ordenamiento jurídico para hacer nacer la obligación indemnizatoria de la Administración del Estado.

**Décimo:** Que el yerro jurídico descrito ha tenido influencia sustancial en lo dispositivo del fallo, por cuanto, de no haberse incurrido en él, los jueces del grado habrían tenido por establecida la responsabilidad del demandado, razón por la cual el arbitrio de nulidad será acogido.

Y teniendo presente, además, lo previsto en los artículos 764, 767 y 785 del Código de Procedimiento Civil, se **acoge** el recurso de casación en el fondo interpuesto en lo principal de la presentación de fojas 440 en contra de la sentencia de nueve de agosto de dos mil dieciocho, escrita a fojas 435, la que por consiguiente es nula y es reemplazada por la que se dicta separadamente a continuación.

Acordada con el **voto en contra** del Ministro señor Aránguiz y el Abogado Integrante señor Lagos, quienes estuvieron por rechazar el arbitrio de nulidad sustancial, teniendo para ello presente:

**1°** Que de la lectura del recurso de casación en el fondo objeto de estos antecedentes, es posible constatar



que las argumentaciones de la parte actora se construyen sobre hechos no establecidos por los sentenciadores del grado, sino que elaborados por la propia recurrente. En efecto, el arbitrio discurre a partir de un incumplimiento de la demandada en relación a las obligaciones derivadas de tener a su cargo un establecimiento educacional, remitiéndose al artículo 46 letra i) del Decreto con Fuerza de Ley N°2 del año 2009 y al artículo 15 del Decreto Supremo N°315 del año 2010, ambos del Ministerio de Educación y que se refieren a exigencias de infraestructura que deben cumplir los establecimientos educacionales, tópico respecto del cual no se ha establecido hecho alguno que dé cuenta de un incumplimiento del municipio, que genere la responsabilidad que se demanda.

2° Que de ello se sigue que el recurso de casación carece de los antecedentes fácticos que autorizarían a acudir a los preceptos que se denuncian infringidos, situación que no es posible variar desde que esta Corte de casación no puede modificar los hechos que han fijado los magistrados del fondo en uso de sus atribuciones legales, estableciendo otros, puesto que tal finalidad es ajena a un recurso de esta especie, destinado a invalidar una sentencia en los casos expresamente establecidos por la ley; esto es, en la casación se analiza la legalidad de una sentencia, lo que significa verificar un escrutinio





respecto de la aplicación correcta de la ley y el derecho, pero los hechos tal y como los han dado por probados los magistrados a cargo de la instancia no son susceptibles de ser modificados por esta Magistratura, a menos que se haya denunciado y comprobado la efectiva infracción de normas reguladoras del valor de la prueba, cuyo no es el caso de autos.

3° Que, en consecuencia, en concepto de estos disidentes no es posible advertir la concurrencia de los vicios que sustentan el recurso de nulidad en examen, el que, de consiguiente, no puede prosperar.

Regístrese.

Redacción a cargo del Ministro señor Prado y la disidencia, de sus autores.

Rol N° 23.078-2018.

Pronunciado por la Tercera Sala de esta Corte Suprema integrada por los Ministros (a) Sra. María Eugenia Sandoval G., Sr. Carlos Aránguiz Z., Sr. Arturo Prado P. y los Abogados Integrantes Sr. Jorge Lagos G. y Sr. Antonio Barra R. No firman, no obstante haber concurrido a la vista y al acuerdo de la causa, el Ministro señor Aránguiz por estar con licencia médica y el Abogado Integrante señor Barra por haberse ausentado. Santiago, 25 de octubre de 2019.





Autoriza el Ministro de Fe de la Excma. Corte Suprema

En Santiago, a veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, notifiqué en Secretaría por el Estado Diario la resolución precedente.

